

Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

En un procedimiento sobre prácticas antisindicales, deduce recurso de nulidad la demandante en contra de la sentencia definitiva dictada el 9 de julio de 2019, por Danilo Barría Cárcamo, Juez titular del 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declara:

I. Que SE ACOGE la excepción de caducidad interpuesta por la parte denunciada CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE-CODELCO CHILE, Empresa del Estado, representada legalmente conforme el artículo 4° del Código del Trabajo, por su Presidente Ejecutivo don Nelson Pizarro Contador.

II. Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del Trabajo, no se condena a la denunciante al pago de las costas de la causa, al no haber sido completamente vencida, al haberse rechazado la excepción de corrección del procedimiento.

La demandante deduce recurso de nulidad el que funda en tres causales, que interpone una en subsidio de la otra.

Se trajeron los autos en relación y se escucharon alegatos de los abogados que concurrieron a estrados.

Considerando:

Primero: La primera es la causal del artículo 477 del Código Trabajo, por infracción de ley en relación a los artículos 486, 168 y 432 del mismo Código y de los artículos 253 y 257 del Código de Procedimiento Civil, señala que según consta en autos, la denuncia materia de estos antecedentes fue interpuesta con fecha 7 de diciembre de 2017, asignándosele el RIT T-1518-2017, y que por resolución del tribunal de 19 de diciembre del mismo año se ordenó asignarle un RIT correspondiente a denuncia por prácticas antisindicales, cual es el S-1492017, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2017, y obedece a razones de índole administrativa.

En el considerando Noveno, el sentenciador señala que acogerá la excepción de caducidad opuesta *"ello porque como se sabe, la denuncia fue interpuesta con fecha 27/12/17"*, es decir, la sentencia tiene por ingresada la demanda con fecha 27 de diciembre de 2017, y no el día 7 de diciembre del mismo año, lo que provoca la infracción de las normas señaladas.



La errada interpretación y aplicación del derecho en este caso, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, determinando que se acoja la excepción de caducidad de la acción, y de no haberse incurrido en el vicio que se denuncia, el tribunal se habría pronunciado sobre el fondo de la cuestión debatida, acogiendo la demanda.

En subsidio, deduce la causal del art 477 del Código del Trabajo por haberse infringido el derecho al debido proceso (derecho a defensa, procedimiento legal racional y justo) y a la tutela judicial efectiva, indica que esta se produce en el mismo considerando Noveno, ya que bajo la doctrina del fallo impugnado, bastaría que los tribunales modificaran los RIT de las causas, las reingresaran, dejaran pasar los plazos de caducidad, para luego declararla, ahorrándose el trabajo de administrar justicia.

La corrección del procedimiento es un acto posterior a la presentación de la demanda, que no depende de la voluntad del demandante ni modificó de forma alguna la demanda presentada, por lo que el tiempo transcurrido entre el 7 y el 27 de diciembre de 2017, no se le puede imputar o reprochar al demandante, sino a la demora del tribunal en modificar el RIT de la causa.

La sentencia recurrida es injusta porque habiendo el sindicato ejercido su acción dentro de plazo, se le niega a dicha parte el acceso a la jurisdicción por actuaciones de oficio del tribunal.

Además, la sentencia agrega un nuevo hecho no discutido, la fecha de la presentación de la denuncia, señalando que se acoge la excepción porque "como se sabe" la demanda fue ingresada en una fecha distinta a aquella en la que efectivamente se interpuso.

En subsidio invoca la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, señala que la sentencia recurrida no expresa ninguna razón de carácter jurídico, lógica, científica, técnica o de experiencia que le permita establecer que la demanda de autos fue interpuesta fuera de los plazos establecidos en los artículos 486 y 168 del Código del Trabajo; y, tampoco se efectúa un análisis de la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de los medios de prueba, ni de la demanda y contestación, ambas coincidentes en que la primera fue deducida el 7 de diciembre de 2017.

Solicita:



- que se declare en la correspondiente sentencia de reemplazo que el fallo impugnado ha incurrido en alguna de las causales invocadas una en subsidio de la otra, que en consecuencia se rechace la excepción de caducidad interpuesta acogiendo la demanda en todas sus partes o lo que SS. ltma. estime corresponda conforme a derecho y que se condene expresamente a la demandada al pago de las costas.

Segundo: Que el cuestionado considerando noveno del fallo, señala en síntesis “Que la parte denunciada interpone la excepción de caducidad, basada en que las acciones de práctica antisindical y de tutela de derechos fundamentales se encuentran caducas, pues han sido presentadas habiendo transcurrido en exceso el plazo legal.

Que al efecto, la denuncia señala como hecho fundante de la acción intentada en el hecho ocurrido con fecha 23/8/2017, oportunidad en que el señor Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de CODELCO, en su discurso dado en el Hotel Camino del Inca, en El Salvador, habría proferido palabras que vulneraría derechos fundamentales, y serían consideradas una práctica antisindical.

Luego añade, que a juicio del a quo dos son los temas que debe resolver a) la idoneidad de las denuncias presentadas con fecha 27 de agosto de 2017, 31 de octubre de 2017 y 7 de diciembre de 2017, para dar lugar a la suspensión a que alude el artículo 486 del Código del Trabajo y b) si ha transcurrido el plazo que hace procedente la excepción de caducidad, y en este tenor menester es indicar que la denuncia se basa en este hecho único, y exclusivo cual es, el discurso del señor Pizarro ante los trabajadores en el Hotel Camino del Inca, en la ciudad de El Salvador. En ese sentido se habla de hechos adicionales de acoso y hostigamiento, mas en la denuncia sólo se indica este hecho como fundante de la acción de práctica antisindical, por lo que a pesar de lo indicado por la parte denunciante al evacuar el traslado, se trata de un hecho único. Por ello, el único evento que permite sustentar el inicio del cómputo del plazo, es el referido discurso emitido con fecha 23/8/2017.

De esta forma, al haberse interpuesto Carta Denuncia por amenazas y condicionamiento de empleo, que dirige Rodrigo González al Director



Regional del Trabajo, con fecha 27.09.17, esto es, el 28° día hábil, se aplica la suspensión a la que alude el artículo 168 del Código del Trabajo.

Que como se sabe, la denuncia fue interpuesta con fecha 27/12/2017, por lo que habiendo transcurrido más de 60 días desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada, la acción de tutela se encuentra caduca.

Lo mismo cabe aplicar en lo referente a las denuncias presentadas con fecha 31/10/2017, esto es, el 55° día hábil; y el 7/12/2017, el 86° día hábil. Ello, porque como se sabe, la denuncia fue interpuesta con fecha 27/12/2017.

De esta forma, este tribunal acogerá la excepción de caducidad interpuesta por la parte denunciada.

Tercero: Que para acoger la suspensión a que se refiere el artículo 486 del Código del Trabajo hay que estar a lo preceptuado en el artículo 168 *“El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador.”*

Así entonces, tal como lo señala el sentenciador al analizar y ponderar las probanzas rendidas, acoge la excepción de caducidad con estricto apego a las normas indicadas, basado en los hechos que ha tenido por establecidos en autos, por lo que esta Corte no divisa la trasgresión de ley que se acusa, habida consideración que conforme aparece del libelo de impugnación y lo sostenido en estrados, el reproche del recurrente se orienta a cuestionar los hechos, lo que no resulta atendible conforme a la causal incoada y por ello se desestimaré.

Cuarto: Que la segunda causal se refiere al artículo 477 por vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, alegando nuevamente que el sindicato ejerció su acción dentro de plazo y se le niega el acceso a la jurisdicción por actuaciones de oficio del tribunal.

Este argumento carece de asidero por cuanto se controvierte la fecha de interposición de la demanda que es una cuestión de hecho, y tal como se señaló precedentemente, los hechos fueron establecidos en la sentencia y no



pueden ser modificados por la causal en análisis, por lo demás del examen atento del fallo no se advierte la vulneración del debido proceso en que se basa la infracción de ley, por lo que este capítulo del recurso se desestimaré.

Quinto: Que la última causal que se denuncia es la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, infracción a las reglas de la sana crítica, pues dice que la sentencia no expresa ninguna razón de jurídico, lógica o de experiencia que permita establecer que la demanda fue interpuesta fuera de plazo.

Sexto: Que, para configurar la causal de invalidación invocada es necesario que concurren dos requisitos copulativos, a saber: que la sentencia se haya dictado con infracción a las reglas de la sana crítica y que ésta sea manifiesta.

De la lectura atenta del fallo, nada de eso se advierte, pues el a quo expresó los razonamientos que lo llevaron a la decisión conforme a los medios probatorios aportados, además que el recurrente no señala en su libelo qué reglas de la sana crítica se vulneraron, y sus alegaciones se dirigen a cuestionar el valor probatorio que el juez le asignó, lo que impide que este arbitrio prospere.

Séptimo: Que cabe precisar que todas las causales del recurso de nulidad se sustentan sobre la base de que el plazo de caducidad para haber deducido la demanda no se habría cumplido ya que estaría suspendido por haberse interpuesto reclamo administrativo previo ante la Dirección Regional del Trabajo, pero a la luz de lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, la denuncia por tutela laboral como la por prácticas antisindicales, conforme lo estatuye el artículo 292 del mismo código, “...deberá interponerse dentro de sesenta días desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168.”

Esta disposición establece que el plazo se suspende cuando –dentro de éste- el trabajador interpone reclamo ante la Inspección del Trabajo respectiva, es decir, del tenor literal de la norma se consigna que es la Inspección del Trabajo la entidad administrativa ante quien se debe interponer la denuncia y no otra como sucede en el caso de autos, ya que la Dirección Regional del Trabajo carece de facultades conciliadoras o



fiscalizadoras que le permitirían a los trabajadores solucionar el problema en una instancia administrativa alternativa al procedimiento judicial, lo que refuerza los argumentos vertidos en el fallo por la a quo y que esta Corte comparte.

Octavo: Que, a mayor abundamiento cabe considerar que el petitorio del libelo de impugnación se aparta de las formalidades que un recurso de derecho estricto como este debe observar, en efecto, es confuso en sus planteamientos y no se pidió concretamente que se anulara el fallo y se dictara sentencia de reemplazo, además el juez no fijó hechos por vulneración de derechos, así que esta Corte tampoco podría hacerlo.

Por todo lo anterior, el arbitrio en análisis será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 19 N°7 de la Constitución Política de la República, 477 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia de 9 de julio de 2019.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2.124-2019.

Redacción de la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie.



Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

